

TITULO: *ACTORES SOCIALES, OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DEL “ESTADO LOCAL”*

AUTOR: Jesús Oliva Serrano (Dpto. de Sociología, Universidad Pública de Navarra, jos@unavarra.es)

RESUMEN: Las transformaciones que experimentan las sociedades del cambio de siglo han abierto el mundo rural a tendencias, relaciones, oportunidades e incertidumbres impredecibles hace apenas unas décadas. Por un lado, los entornos locales se han convertido progresivamente en escenarios donde confluyen las nuevas tendencias residenciales, los movimientos migratorios, las demandas turísticas, de conservación y de localización productiva, etc. De esta forma, no solo pueden albergar en muchas ocasiones un variado elenco de actores sociales sino que se conforman progresivamente como una realidad compleja sobre la cual son llamados a intervenir cada vez de forma más polivalente los poderes locales pues estos procesos otorgan a los mismos un papel estratégico en la organización del bienestar social, la mediación para los cambiantes y necesarios consensos locales así como la interlocución con los otros niveles de las administraciones públicas. Y si bien la revolución de los medios de comunicación permite hoy desarrollar diferentes fórmulas de democracia participativa en estos contextos, también las consecuencias derivadas de la tensión que el nuevo espacio de los flujos identificado por Castells (1995) ejerce sobre el viejo espacio de los lugares, someten el futuro de numerosas localidades a una incertidumbre multiplicada. Se reflexiona en este trabajo sobre los efectos, posibilidades y peligros que conllevan estos nuevos procesos, prestando una especial atención a la ruralidad Navarra.

***** *****

1. EL ESTADO LOCAL COMO POSIBILIDAD Y FORZAMIENTO

El “Estado Local” cuyas formas exploramos en estas líneas no existe salvo como posibilidad (utopía de una democracia participativa perfecta solo posible en el pequeño entorno social) y como forzamiento (expresión de la necesidad de gobernar una realidad cotidiana crecientemente compleja y en la que se imbrican numerosas prácticas sociales). En la primera tendencia analizados las experiencias que tratan de aproximarse (a partir de nuevos instrumentos de participación y gestión así como las aplicaciones de las nuevas tecnologías telemáticas) al viejo mito occidental de la comunidad o ciudad felizmente autogobernada. El modelo de la *ciudad-estado* griega, las repúblicas y utopías renacentistas, los *falansterios* de Fourier que buscan la “armonía pasional universal”, los pueblos de Owen para el progreso social de la clase obrera, la *ciudad-jardín* de Howard que ejerce un “casamiento” entre el campo y la ciudad integrando lo mejor de ambos entornos, etc. han plasmado esta narrativa recurrente.

Todos estos modelos han estado siempre asociados procesos para la puesta en valor de los verdaderos sentidos sociales, favorecer la afloración del verdadero ser humano, la regeneración colectiva o la reapropiación de la vida cotidiana por sus habitantes. Y, nunca como ahora, se ha dispuesto de tantos recursos, tecnologías e instrumentos para desarrollar y dinamizar estas utopías locales: consejos ciudadanos, presupuestos participativos, consultas populares,... Numerosas iniciativas, programas y herramientas de planificación y gestión participativa han aparecido en las agendas del poder local (Agenda 21, foros de propuestas, metodologías de Investigación-Acción-Participación, etc.). Y, como todos los hallazgos surgidos de la justicia social se han revelado estratégicas para involucrar a los vecinos legitimar las decisiones políticas. En cuanto buscan romper la vieja división entre saber “técnico” y “popular” subyace en todas ellas la creciente necesidad de incorporar a los colectivos y ciudadanos en el diagnóstico, investigación, diseño y seguimiento de las políticas públicas así como la conciencia acerca del la ideología que oculta el urbanismo tradicional y los mitos de la tecnocracia que ya denunciara Lefebvre (1970).

Pero, por otro lado, todo este movimiento coincide con un momento histórico en el que los lugares y las economías locales experimentan la tensión producida por la emergencia de un nuevo “espacio de los flujos” (Castells, 1995), por el que circulan y se multiplican la información, los capitales y las élites. Un espacio que viene ejerciendo una continua presión sobre los territorios del viejo espacio de los lugares donde se arraigan el trabajo y los sentidos sociales para reorganizar los procesos productivos y las estrategias geopolíticas del capital. Literalmente, como apunta Bauman (2001), el capital se ha marchado, se ha “evaporado” en su penúltima abstracción global y, en la medida en que se libera cada vez más de su fricción territorial requiere que los restantes factores del proceso productivo (materias primas, trabajo, energía...) adquieran esa misma fluidez y flexibilidad (flujos migratorios, desregulación del mercado de trabajo, tutela del mercado del crudo, etc.). En este sentido, la posibilidad del *Estado Local* se conforma también como un *forzamiento* creciente derivado al poder local para que intervenga sobre una realidad efervescente, cambiante y *glocalizada* en la que los lugares, las prácticas y las incertidumbres han sido ligados progresivamente. Esta es sin duda ya, la naturaleza de nuestro objeto de estudio como investigadores del mundo rural.

Como consecuencia de estos procesos, se ha favorecido una ampliación continua de las áreas y campos de intervención de los gobiernos locales, que deben así tratar de dar respuesta (en diferentes grados y sensibilidades) a demandas surgidas en relación con el bienestar, el empleo, la igualdad, el medioambiente, la solidaridad, etc. además de extender su mediación entre los nuevos actores locales emergentes y el resto de administraciones (mas adelante, ilustramos esta circunstancia con el caso de la reciente regularización de los trabajadores inmigrantes en Navarra). En este sentido, la creciente heterogeneidad social de numerosas comarcas nos lleva al interrogante sobre como acabarán configurándose a medio plazo los diferentes *melting pot* locales (por ejemplo, allí donde domina la agroindustria, o en el litoral turístico, o también en los entornos metropolitanos, etc.)¹. Los poderes locales se enfrentan a esta realidad local cada vez

¹ La prensa señalaba hace poco como “milagrosa” la experiencia de Talayuela. Un municipio extremeño de 11.000 habitantes, con el 40% de los vecinos de origen extranjero (de 22 nacionalidades), matrimonios mixtos, una escolarización completa y viviendas para inmigrantes (la mayoría llegados para trabajar en el tabaco). Numerosos hogares sintonizan con antenas parabólicas las emisoras marroquíes y Al-Jazira. Sin duda, el futuro de muchas comarcas agrícolas puede ser parecido. Pero también la diversidad ciudadana

más compleja asumiendo funciones tradicionalmente vinculadas a los Estados hoy parcialmente desorganizados por los cambios sobrevenidos tras el final de la *guerra fría* (políticas supraestatales, procesos descentralizados, etc.).

2. LA CONFLICTIVA REGULACION DE LO RURAL

A los procesos anteriores se unen las consecuencias locales de otras tendencias (cambios residenciales, desarrollo turístico, dispersión urbana, expectativas de negocio generadas por la gestión de los recursos naturales -agua, paisaje, suelo, ...-, etc.) que vienen ejerciendo una presión incesante para la regulación de “lo rural” (campos de golf, pantanos, promociones residenciales y turísticas, etc.) que propicia la continua mercantilización de muchos elementos y espacios hasta ahora relativamente intactos. Así, el abastecimiento de agua a las grandes ciudades (Zaragoza, Pamplona-Iruñea, etc.), las opciones de intensificación agraria asociada a la mejora de los regadíos, las promociones de ocio y turismo (campos de golf, pistas de esquí, ...) vienen siendo objeto de un conflicto continuo tanto en el Pirineo navarro como aragonés (Itoiz, Larra, Artieda, Mianos, Sigues). No en vano, las opciones que se adoptan en el desarrollo de cada proyectos desencadenan inevitablemente relaciones de exclusión y distinción social (es preferible la clase media urbana como turista o veraneante que la “ocupación” de pueblos abandonados o favorecer la rehabilitación de viviendas por grupos próximos a una ideología hippies, neorrurales o, simplemente, alternativa). Pero la regulación se extiende también a los aspectos simbólicos, como por ejemplo, las fiestas locales². Esta presión para que actúe e intervenga el poder local puede acabar configurándose también como una crisis política. En 2002, en el municipio de Cortes, una manifestación (reivindicativa y festiva) de los vecinos exigía a sus representantes iniciativas para el desarrollo local (recuperar el patrimonio histórico, impulsar la ampliación de suelo industrial, la creación de una televisión local, la articulación de una mesa de la juventud, etc.) declarando que el descontento no es limitado a ninguna sigla política sino al conjunto de sus representantes.

3. LAS POLITICAS DEL BIENESTAR LOCALIZADO

Como hemos apuntado, la complejidad creciente de lo local y la generalización de nuevos valores (ecología, solidaridad, etc.) han requerido una creciente intervención y diversificación de las políticas públicas (desde la sensibilización sobre la violencia de género a la mediación cultural con los trabajadores inmigrantes locales, pasando por la

configurada en las zonas turísticas y el litoral es una tipología propia. Como lo es la convivencia de nuevos residentes y locales en los entornos rurales de las áreas metropolitanas o el de los veraneantes y las segundas residencias en otros paisajes sociales.

² En el 2002 se celebró en Peralta un referéndum sobre el proyecto de trasladar las fechas de las fiestas patronales en el que participan el 57% de los vecinos y se rechaza por 60% de los votantes. Los empresarios locales se quejan de que después del mes de agosto en el que la mayoría de las empresas paran su producción, no pueden permitirse el lujo de cerrar también en septiembre. En 1994 ya se había celebrado otro referéndum a propósito del mismo tema. También ese año otro municipio navarro, la localidad de Sesma, después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara el cambio de las fechas de las fiestas, y ante la presión de los vecinos se retiró el acuerdo. A principios del año y tras una consulta no vinculante decidió cambiarlas y celebrarlas durante seis días de agosto y tres en septiembre. En Octubre decide reducirlas a una semana y celebrarlas a partir del 15 de agosto. Ante las protestas vecinales se dejaron como estaban, el 22 de agosto y en septiembre.

cooperación al desarrollo, las ayudas de solidaridad internacional canalizadas a proyectos de ONGs, etc.). De este modo, las políticas sociales se han configurado como resultado de hibridaciones particulares de cada cultura local, los marcos institucionales y legislativos así como el juego de los actores activados en cada campo concreto.

La consolidación del Estado moderno, forjada con el proceso de desarrollo del capitalismo y la progresiva mercantilización de todos los ámbitos de la vida cotidiana, debió asumir la responsabilidad del despliegue del Bienestar. La *gran transformación* de Polanyi (1944) disuelve los diferentes sistemas de intercambio de las sociedades tradicionales en el mercantil acabó sometiendo a verdaderos ejércitos de asalariados desarraigados de sus mallas sociales a los riesgos de la precarización absoluta. Bajo la presión de las organizaciones sociales surgen entonces las formas embrionarias de un Estado del Bienestar que organiza la intervención de arriba abajo con objeto de garantizar una estabilidad necesaria para el despliegue del capitalismo de consumo. Los propios conceptos que identifican esta intervención del Estado fordista (seguridad social, provisión social, etc.) evocan el trasfondo sobre el que se perfila su razón última: promover una justicia social que permita legitimar el orden social existente.

Sin embargo, la reestructuración que desata la crisis de los años setenta y la reorganización política global experimentada desde entonces, han erosionado los objetivos y valores de aquel modelo. Allí donde se había consolidado, sus políticas han sido revisadas (desregulación, privatización, crítica de las políticas intervencionistas, etc.) y, allí donde trataban de implantarse con menos recursos o formas imperfectas, se han reorientado hacia sistemas mixtos que conjugan nuevos conglomerados de actores e instituciones y en los que el bienestar se concibe como una responsabilidad compartida (privatización, voluntariado, refamilización, etc.). A medida que los costes de la desregulación y la reestructuración económico-productiva se extendían a las clases medias eclosionan nuevas demandas fragmentadas que favorecen una noción del riesgo social que ya no es colectiva (ni en su gestión ni en sus causas) sino específicas, incluso personalizada. Estos sistemas de políticas sociales que parecen reflejar así el nuevo consenso (posindustrial, posfordista, posmoderno) bajo el que son integradas y conciliadas las múltiples voces que participan del nuevo contrato social (vid. Moreno, 2000). En este contexto, las entidades locales ejercerán un papel determinante como replicadores y gestores de las políticas estatales o supraestatales que ofrecen financiación (para campañas de sensibilización, información, etc) así como en la mediación entre estas instancias y sus propios actores locales.

4. INSTRUMENTOS PARA REAPRENDER LA PARTICIPACION

Nuevas herramientas participativas permiten hoy a movimientos y asociaciones ciudadanas colaborar en el diseño de la agenda y las prioridades de la política local. Se configuran así como una alternativa frente a la *tecnologización* de la política local, el clientelismo político, el distanciamiento de los representantes o la insolidaridad en el reconocimiento del otro. En todas ellas se halla implícita la conciencia de la crisis de la racionalidad moderna que reificaba el conocimiento técnico. Así los *presupuestos participativos*, implantados desde 1989 en Portoalegre (Brasil), se aplican hoy en 70 municipios de ese país, dos de sus estados y se estudian como posibilidad en países de los cinco continentes. Una herramienta recomendada por la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales (ONU, Estambul, 1996) y estudiada de cerca por la

OCDE, el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea, etc. De acuerdo a diferentes combinaciones de la democracia *representativa* y la *participativa* son empleados en diversas localidades del Estado como Rubí (Barcelona), Córdoba, Albacete, Cabezas de San Juan (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba).

Pero, además, junto a estas herramientas, las nuevas aplicaciones telemáticas han generado ya una dimensión cibernética de la realidad local. El estudio *Radiografía de las webs municipales* que realiza periódicamente *El País* muestra los campos más sugerentes hacia los cuales se viene orientando hasta ahora su uso por parte de los Ayuntamientos (servicios de voluntariado vecinal para acompañar a personas impedidas o solas; para compartir coche en viajes de 'commuting' cotidiano, pero sobre todo, la atención al ciudadano -desde la información completa sobre los plenos a la descarga de impresos o la tramitación en red de diferentes solicitudes y servicios-). Todos estos ejemplos muestran la creciente necesidad de los poderes locales de afirmarse y gestionar la nueva dimensión (cibernética) que adquiere su propia realidad social³. Es interesante en este sentido, la disparidad del reconocimiento que de esta realidad hacen las diferentes administraciones. Así, las autonómicas, de las diputaciones o las federaciones de municipios disponen de cifras mucho más elevadas de las *webs* municipales que las ofrecidas por el Ministerio competente. Las mayores disparidades se producen con Euskadi y Cataluña. Si en Alava el Ministerio cuenta siete, la federación de municipios vascos cuenta 31. Los 19 que el primer organismo reconoce en Guipúzcoa se transforman en 89 para la federación. Y así también los 18 de Vizcaya se amplían a 65. En Barcelona las 201 *webs* del Ministerio se convierten en 280 para la Diputación. Esta anécdota ilustra bien sin embargo la forma como se configuran las conexiones y estructuras de las redes locales.

En una línea parecida, las radios y televisiones locales han adquirido una presencia local importante. El Censo de Televisiones Locales que realiza la Asociación para el Estudio de los Medios de Comunicación (AIMC) registra un incremento constante de la presencia de este medio en las zonas rurales (897 en 2002, que distribuían a un total de 606 municipios). El contenido y duración de las emisiones sigue siendo muy variado (desde la que se remite en exclusiva a dar cuenta de las fiestas locales a las que cuentan con un presupuesto amplio y una programación variada) y el sector tiende a conformarse en redes como Localia TV, Grupo Canal 47, Local Media SL, la cadena UNE, etc.

5. EL CASO DE LA REGULACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN NAVARRA

El proceso migratorio, pese a las sucesivas y reiteradas llamadas de atención sobre sus múltiples repercusiones sociales y la ausencia de políticas adecuadas, acabó desbordando a la administración central. A medida que tomaba forma en Navarra, han

³ En la provincia de Barcelona todos los municipios con más de 20.000 habitantes tienen *web* y todos los ayuntamientos disfrutan de conexión con la diputación punto a punto con RDSI. También 281 municipios de sus 31 tienen gestión tributaria y recaudación en la Red, firma digital y sus vecinos pueden acceder al pago electrónico. En este sentido, el pasado mes de diciembre, 176 Gobiernos aprobaron en Ginebra una declaración de principios para combatir la brecha digital y el propósito de conectar todas las aldeas a Internet. Un objetivo cifrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 5.300 millones (conexión telefónica y a Internet). Los gobiernos de países pobres han solicitado la creación de un fondo solidario para ello.

proliferado los actores e interlocutores sociales, especialmente durante el último proceso de regulación: Ayuntamientos, Parlamento de Navarra, Sindicatos, ONGs (Cáritas, Cruz Roja, SOS-Racismo), Asociaciones de inmigrantes (pro-Ecuador, Contigo-Perú, Simón Bolívar, Atime, Mezquita...) y ciudadanas. Pero además, este conglomerado ha venido ejerciendo una mediación estratégica, asumiendo la ejecución de programas orientados a diferentes campos de actuación (formación, acogida, información y ayuda -carnés de conducir, alquiler de vivienda, etc.) y una amplia labor de mediación. Ni el gobierno central ni los autonómicos ni la tampoco la Unión Europea habían diseñado una estrategia o directrices explícitas y sus políticas se han dirigido principalmente a la gestión de los procesos de regularización y control de los flujos migratorios. Pero es indudable que muchas de las consecuencias sociales que se harán manifiestas a medio plazo requieren aplicar soluciones en el presente. El proceso migratorio en Navarra afecta especialmente a la Cuenca de Pamplona y los municipios de la Ribera de Navarra (cuyas economías se hayan a menudo fuertemente especializadas en la agroindustria). Su peso sobre la población local en esta última comarca se estima cercano al 12% si bien algunos municipios (Peralta, Tudela..) superan estas cifras. En su mayoría son magrebíes procedentes de Marruecos y Argelia (sobre todo varones) y latinoamericanos procedentes de Ecuador y Colombia (en este caso mayoritariamente mujeres).

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno central durante el 2000 para regular el proceso -multas por la contratación de “sin papeles”, expulsiones, petición a los Ayuntamientos para que no empadronen “sin papeles”, etc.- las organizaciones sociales desarrollaron acciones para frenar una aplicación celosa de la Ley de Extranjería. Ese año, el Parlamento Foral obliga a su Gobierno a extender la Tarjeta Sanitaria a todos los inmigrantes; los ayuntamientos (Pamplona, Irurtzun, Tudela, Milagro, Peralta, Azagra, etc.) intervienen con diferentes programas de formación laboral (cuidado de personas dependientes, de niños, de limpieza a domicilios, peonaje, etc.), así como la creación de Plataformas Cívicas, Planes Integrales de Inmigración, Mesas o Consejos locales, etc. En un sentido parecido actúan las organizaciones No Gubernamentales (SOS-Racismo, Cáritas, etc.) (Salones Interculturales, clases de apoyo para escolares, información y asesoramiento, ayuda, etc.) y los sindicatos (autoescuelas para la homologación de permisos de conducir, información, empleo, etc.). En 2001, los sindicatos agrarios anuncian que el Gobierno debe dar más permisos de trabajo si quiere solucionar el problema (de la recolección) (UAGN, 2001). Así, el alcalde de Mendavia anuncia que no preparará ese año el camping para los temporeros ante la falta de ayuda del Gobierno Foral que solo llegará unas semanas antes del comienzo la vendimia. Por otro lado, bajo el auspicio de los Ayuntamientos, ONGs, sindicatos y asociaciones ciudadanas afloran las primeras asociaciones de inmigrantes (Asociación Pro-Ecuador, Asociación Simón Bolívar, Asociación Contigo-Perú, etc.). Numerosos gobiernos locales (Cascante, Tudela, Irurtzun, Peralta, Cintruénigo, etc.) asumen entonces un nuevo papel mediador (a menudo solicitado por las propias administraciones foral y central) realizando tareas de información, acogida, tramitación de solicitudes, formación, tramitando solicitudes, etc.⁴. Así, en 2001, el Ayuntamiento de Tudela promueve un Plan Integral de

⁴ En 2000, un R.D. regulariza a los que solicitaron la residencia el año anterior pero no pudieron acreditarla en su día antes de Junio de 1.999; los Parlamentos vasco, andaluz, extremeño, balear, castellano-manchego y navarro recurren la Ley de Extranjería y las movilizaciones relacionadas con la inmigración protagonizan el debate político de este año. En Navarra destaca especialmente el conflicto generado en la Delegación del Gobierno en Navarra debido al colapso de los servicios de la administración y la polémica final que acaba con la sustitución de uno de sus responsables que sin embargo es homenajeado por los sindicatos, ONGs y colectivos de inmigrantes. La avalancha de solicitudes es gestionada finalmente por estas organizaciones sociales y sindicales que se han encargado

Inmigración (centro de acogida, ayudas para libros y recursos escolares, observatorio municipal y consejo o mesa local sobre inmigración).

6. LA ORDENACION DE LA CUENCA DE PAMPLONA-IRUÑEA

El creciente papel de negociación que los poderes locales deben asumir se expresa en los contextos metropolitanos como en ningún otro lugar debido a los procesos que convergen en estos entornos. Un buen ejemplo es la Cuenca de Pamplona-Iruñea, donde se concentran más de la mitad de los residentes en la Comunidad Foral, y que experimenta una tendencia creciente de dispersión metropolitana, demandas de suelo para promover viviendas, áreas de ocio, infraestructuras y comunicaciones básicas, etc. Esta presión para la regulación de la distribución de recursos y no-recursos en este espacio viene desencadenando una conflictividad generalizada entre la ciudad central, el Gobierno Foral y los poderes municipales del entorno en la medida en que la ordenación territorial encierra decisiones concretas sobre plusvalías e intereses contrapuestos. Así, las polémicas en torno a las iniciativas locales para autorizar centros comerciales en su término (Egües, Barañain, vs. Gno de Navarra, en 2000y 2001), las demandas de ampliación del transporte comarcal (Berrioplano, Ballarain, Berriozar...), el proyecto de vertedero de Góngora y protestas del valle de Aranguren (1992-98), el rechazo a las instalaciones de residuos tóxicos de Galar, Olza y otros municipios, la oposición a los proyectos de cárcel (Tiebas-Muruarte en 1998, Valdizarbe en 2001), el derribo de las construcciones existentes en los despoblados (.....) para evitar ocupaciones, etc. muestran la conflictiva regulación de lo rural que convulsiona este espacio.

Un ejemplo que puede servir de *analizador social* para visualizar el complejo entramado de actores que puede acabar activando un proyecto concreto y como son agrupados en estas batallas es el caso de la Planta de Tratamiento de Residuos Especiales proyectada realizarse en Los Arcos (2001-2002) (en este caso, un municipio relativa alejado de la Cuenca). Befesa (empresa promotora), Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Los Arcos presentan el proyecto tras dos años de estudios, que recibe más de 12.000 alegaciones presentadas por Ayuntamientos colindantes, asociaciones, vecinos, etc. El Ayuntamiento de Los Arcos había negociado a cambio los beneficios generados por los impuestos, las contribuciones, los empleos directos (acuerdo Ayuntamiento-Befesa) y los alquileres de los terrenos (1.250.000 m²). Pero los grupos opositores al proyecto se multiplican (pueblos limítrofes, agricultores, ecologistas, etc.) y se activan muy rápidamente (recogida de firmas, petición de apoyos, conferencias con invitados de municipios donde la misma empresa ha instalado ya otras plantas similares -Nerva, en Huelva-. La presión en contra de la Planta culmina con una manifestación en enero de 2002 en Lodosa de varias decenas de miles de personas que es apoyada por un

de asesorar a los extranjeros, recoger solicitudes y tramitar las mismas en las oficinas del DNI y pasaportes -Cáritas lo hizo con 2000, Anafe-CCOO con 1630, los centros de UGT con 889, Cruz Roja con 600 y USO con 28- y que se convierten así en agentes mediadores. Pero más tarde, UGT, CCOO, Cruz Roja y Cáritas rompen relaciones con la Delegación del Gobierno en Navarra y critican el retraso en los permisos y el excesivo celo en el cumplimiento de la ley. La Comisión Integrada por el Gobierno Foral, el Servicio Navarro de empleo, el Inem, UGT, CCOO encargada de determinar cuantos inmigrantes se necesitan en Navarra para configurar el cupo estatal del próximo año, resuelve no fijar ningún nuevo cupo de inmigrantes hasta que no se regularice la situación de los actualmente pendientes que se estiman en 10.000, la mitad de ellos sin papeles y sin posibilidad de solicitarlos pues llegaron mas tarde de la fecha limite señalada

variopinto movimiento de oposición: Ayuntamientos de Mendavia, Lodosa, Lazaguiría, Sansol, Bargo, Sesma, Sartaguda, El Busto, Aras, Torres del Rio, Desojo, Viana, Allo, Arroniz (en Navarra), de Alcanadre, Agoncillo, Arritibal, Rincon de Soto, El Villar de Arnedo (en La Rioja); sindicatos (UGT, LAB, CCOO, EHNE, COAG, UAGN, UAGR), partidos políticos (PSOE, IU, Batasuna, Batzarre y PP-Rioja); las Denominaciones de Origen (de Rioja, Piquillo, Cava, Espárrago y Patxaran); las asociaciones ecologistas (Gurelur, Ecologistas en Acción) así como más de dos docenas de empresas conserveras y bodegas (El Coto, Olarra, Faustino Martinez, etc.).

7. A MODO DE CONCLUSION

Los procesos de cambio experimentados por las sociedades de finales del siglo XX han acelerado los procesos sociales económicos y sociales abriendo numerosos campos de intervención sobre los que se reclama una actuación de los poderes locales. El “Estado Local” se perfila tras estos procesos a la vez como un posibilidad y como un forzamiento. Obligados a intervenir sobre escenarios locales crecientemente complejos y conectados a las oportunidades e incertidumbres locales así como a desarrollar las posibilidades de una democracia participativa o la nueva dimensión local cibernética los gobiernos locales se enfrentan a nuevos retos y preguntas. Las demandas de atención a los inmigrantes, de la solidaridad, del desarrollo local, etc. se mezclan y compiten así con las presiones para la regulación de los usos y formas de consumo de los recursos y las tensiones generadas por las competencias con los poderes supralocales. Ante estos retos los municipios disponen de herramientas y tecnologías que permiten intervenir hoy con cierta imaginación con el objeto de favorecer la apropiación por parte de los ciudadanos de su propia realidad local. Sin embargo, las incertidumbres también se han generalizado y todo parece abierto a distintos criterios y posibilidades. Si esbozamos una mirada prospectiva veremos que también son muchas las cosas en juego a medio plazo y que, en el desarrollo del mismo, pueden configurarse sin duda también nuevas desigualdades y procesos de exclusión. ¿Dónde se concentrará las VPO? ¿Qué municipios o valles consolidaran su vocación residencial y cuales otros usos menos rentables? ¿Cómo intervenir y mediar en la configuración del propio *melting pot* local?

BIBLIOGRAFIA

- Bauman, Zygmunt (2001): La sociedad individualizada. Madrid, Cátedra
- Castells, Manuel (1995): La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid, Alianza, 1997
- Lefebvre, Henri (1975): De lo rural a lo urbano. Barcelona, Península
- Polanyi, Karl (1944): La gran transformación: crítica del liberalismo económico. Madrid, La Piqueta, 1989